

Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

En los autos Rol N° 13.877-19, por sentencia definitiva de primera instancia de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, sr. Mario Carroza Espinoza, en lo que a los recursos deducidos interesa, se condena a Roque Isaías Albornoz Solar, a la pena de cinco años y un días de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales, como cómplice del delito de homicidio calificado de Augusto Ramón Cepeda Venegas, ocurrido el 20 de septiembre de 1973, y en cuanto a la acción civil, se condena al Fisco de Chile a pagar a cada uno de los actores, doña Marcela del Carmen Rojas Araya y don Marcelo Augusto Cepeda Rojas, la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral, sumas que se reajustarán según la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas entre la fecha que la sentencia adquiera el carácter de ejecutoria y su pago efectivo, e intereses desde que se constituya en mora.

Impugnada dicha sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, la revocó, en cuanto por ella acogió la demanda civil deducida por doña Marcela del Carmen Rojas Araya y don Marcelo Augusto Cepeda Rojas, en contra del Fisco de Chile y, en su lugar, declara que se rechaza la misma, sin costas. Además, confirma la referida sentencia en su parte penal, con declaración que Roque Isaías Albornoz Solar queda condenado a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales, como autor del delito de homicidio calificado en



la persona de Augusto Ramón Cepeda Venegas, cometido el día 20 de Septiembre de 1973.

Contra este último fallo la defensa de Albornoz Solar dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, mientras que la parte querellante y el Programa de Derechos Humanos interpusieron sólo sendos recursos de casación en el fondo, todos los cuales se ordenó traer en relación.

Y considerando:

I. En cuanto al recurso de casación en la forma.

1º) Que el apoderado de Roque Albornoz Solar deduce, en primer término, recurso de casación en la forma por la causal N° 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los números 4 y 5 del artículo 500 e inciso final del artículo 514, del mismo código.

Refiere, en síntesis, que el fallo establece la participación de Albornoz Solar por meras presunciones, sin hacerse cargo de los planteamientos de la defensa orientados a demostrar su inocencia, sin tampoco señalar las razones para concluir que su participación es de autor en los términos del artículo 15 N° 3 del Código Penal, que se presenta la agravante del artículo 12 N° 8 del mismo texto y que concurre una circunstancia calificante del homicidio. Reclama también que la sentencia no hace referencia al informe de la sra. Fiscal Judicial.

Solicita que se anule la sentencia recurrida, dictando una de reemplazo con arreglo a la ley.

2º) Que mediante la causal de nulidad esgrimida del N° 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal únicamente puede esta Corte examinar que la sentencia haya sido extendida en forma legal, esto es, cumpliendo los extremos



que señala el artículo 500 del mismo cuerpo legal y, en particular los de los N°s. 4 y 5 de este precepto que el recurso echa en falta: *“Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta”* y *“Las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, tanto las agravantes como las atenuantes, y para establecer la responsabilidad o la irresponsabilidad civil de los procesados o de terceras personas citadas al juicio”*, sin que corresponda como parte o con ocasión de esa labor, revisar la conformidad al derecho sustantivo de los razonamientos expresados por los sentenciadores para dar por establecidos los hechos y calificarlos jurídicamente, cuestión que debe ser impulsada a través de la respectiva vía recursiva.

3°) Que el recurrente, en primer término, refiere una serie de deficiencias en la realización de las diligencias de regresión de edad de la fotografía del acusado y de reconocimiento fotográfico, las que habrían sido denunciadas en el proceso y a las cuales no se refiere la sentencia.

Si bien es efectivo que el fallo no repara explícitamente en dichos cuestionamientos, éstos corresponden en definitiva a lo que, en opinión del recurrente, son los requisitos y formalidades que habrían permitido dar valor u objetividad al resultado de dichas actuaciones, con lo cual, primero, lo impugnado en realidad no dice relación con la falta de consideraciones de hecho del fallo, sino con un indirecto reproche a la valoración del medio de prueba -testigo- en el marco del cual tienen utilidad dichas actuaciones y, segundo, al no tratarse de objeciones



fundadas en el incumplimiento de requisitos o formalidades legales, sino meras apreciaciones del impugnante sobre la mejor forma de llevar a cabo las mencionadas diligencias, no resulta imperativo para el juez analizarlas específicamente una a una, desde que el citado artículo 500 N° 4 sólo le instruye, como ya se dijo, exponer las consideraciones en cuya virtud se dieron por probados los hechos atribuidos al procesado y por no probados los hechos alegados para negar su participación, deberes que fueron cumplidos en la especie.

4°) Que sobre las otras alegaciones que la sentencia habría omitido tratar, en particular que Albornoz Solar a la sazón desempeñaba sus servicios en otra zona de Santiago y que, de haber participado en los hechos, habría sido visto con un perro con el que debía concurrir a los operativos, lo que no ocurrió, éstos importan, en último término, un reclamo por no establecer el fallo como hecho que Albornoz Solar no participó en el delito imputado, de lo cual se hace cargo la sentencia precisamente desarrollando las razones por las cuales concluye lo contrario en los motivos 6° del fallo de primer grado y 3° del de segundo grado.

5°) Que sobre la queja del recurrente por la falta de vinculación del acusado a la muerte de Cepeda Venegas, que no habría sido despejada en el fallo, éste la establece en el considerando 3° (*“...pudiéndose presumirse, necesariamente, que las personas que lo detuvieron, golpearon y retuvieron, son las mismas que intervinieron en su muerte.”*), sin que quepa, como ya se ha explicado, mediante esta causal examinar la corrección de dicha decisión, sino únicamente si no se han expresado las consideraciones para así concluirlo, carga con la que el fallo ha cumplido.



6°) Que, asimismo, protesta el recurrente porque el fallo no expresa las razones que sirven de base para concluir que la participación es de autor en los términos del artículo 15 N° 3 del Código Penal, sin embargo, dicha parte en su libelo transcribe los fundamentos que entrega la sentencia sobre el punto en su considerando 4°, las cuales en cambio se estiman desacertadas e insuficientes por el recurrente, reproche que, nuevamente, no puede ser planteado mediante este recurso y por esta causal. Igual razonamiento y resultado es predicable al reclamo sobre la supuesta omisión de motivos para considerar procedente la agravante del artículo 12 N° 8 del Código Penal y para afirmar la calificación del delito de homicidio, pues tales consideraciones se leen en el basamento 5° de la sentencia de alzada y en el motivo 3° del fallo de primer grado, constatación suficiente para desestimar este reclamo.

7°) Que, por último, se critica que en la sentencia no existe referencia alguna al informe fiscal que sugiere la revocación del fallo.

Al respecto, lo que mandata el artículo 514 del Código de Procedimiento Penal es hacerse cargo en el fallo de alzada de las observaciones y conclusiones formuladas por el fiscal y, en el caso de marras, en dicho informe rolante a fs. 2192 y ss., se señala que los antecedentes de autos permiten tener por acreditado que Albornoz Solar participó en la detención de Cepeda Venegas, pero en el homicidio de éste y, por consiguiente, sugiere revocar la sentencia apelada y absolverlo de este último delito, conclusión de la cual se hace cargo la sentencia, como ya se explicó, en el considerando 3° del fallo impugnado, al establecer la responsabilidad en su muerte, y no sólo en su detención, sin que sea necesario para dar cumplido tal deber el hacer referencia expresa al informe fiscal.



8º) Que, por todo lo explicado no se ha configurado el vicio ni la causal denunciada, debiendo desestimarse el recurso de casación en la forma interpuesto por la defensa de Albornoz Solar.

II. En cuanto a los recursos de casación en el fondo:

9º) Que la defensa de Albornoz Solar ha deducido también recurso de casación en el fondo por las causales de los N°s. 1, 2 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, denunciando la errónea aplicación de los artículos 12 N° 8, 15 N° 3, 63 y 391 del Código Penal, 488 N°s. 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, 15 y 15 bis de la Ley N° 18.216 y 19 N° 3, inc. 5º, de la Constitución Política de la República.

Mediante la causal del N° 1 cuestiona el establecimiento de la participación de Albornoz Solar en el delito de homicidio calificado conforme al artículo 15 N° 3 del Código Penal, no obstante que no se determinó el autor material, no se estableció un concierto previo entre los coautores ni una distribución de funciones. Señala luego que se trataría de un cómplice del artículo 16, al cooperar a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Reclama igualmente con esta causal que se haya estimado concurrente la agravante contemplada en el artículo 12 N° 8 del Código Penal, contraviniendo expresamente lo dispuesto en el artículo 63 del mismo código, ya que aquella agravante forma parte especial de este tipo de ilícitos relativos a violaciones a los Derechos Humanos.

La causal del N° 2 del artículo 546 se sustenta en la falta de elementos probatorios para avalar alguna de las calificantes que contempla el numeral 1º del artículo 391 del Código Penal.



Y la causal N° 7 se basa en la infracción de los N°s. 1 y 2 del artículo 488, puesto que las presunciones en que se construye la imputación no se han basado en hechos reales y probados más que la muerte de una persona, pero no las circunstancias que rodearon a ésta y, además se ha presumido la participación de Albornoz Solar, por antecedentes sumamente febles, sin satisfacer los criterios de gravedad, precisión y concordancia, por lo que no se precisa o señala cuál ha sido la conducta desplegada por el presunto hechor.

Finalmente, sin indicar bajo qué causal del artículo 546, expresa que se ha impuesto una pena efectiva sólo en razón del informe presentencial realizado en la causa por Gendarmería de Chile.

Al concluir pide declarar la nulidad del fallo y dictar una sentencia de reemplazo que absuelva a Albornoz Solar o, en subsidio, le aplique una pena ajustada a derecho conforme las infracciones denunciadas.

10°) Que el fundamento de las causales invocadas resulta incompatible.

En efecto, con las causales N°s. 1 y 2 del artículo 546, el recurrente admite la comisión de un delito, pero cometiendo error de derecho, estima que se le ha impuesto una pena más grave que la designada en la ley por corresponder su participación a la de cómplice -y no de autor- y no perjudicarle la agravante del artículo 12 N° 8 del Código Penal y, además, porque se califica equivocadamente el delito como homicidio calificado correspondiendo a uno simple y aplicando la pena en conformidad a esa calificación. Sin embargo, con la causal N° 7 del artículo 546, controvierte el cumplimiento de los extremos del artículo 488 del Código Procesal Penal para tener por probada la participación del acusado en el



delito de homicidio, con lo cual desconoce la procedencia de la imposición de pena alguna.

Como correlato de tal contradicción, en el petitorio del recurso se solicita que en la sentencia de reemplazo se absuelva a Albornoz Solar o, en subsidio, se le aplique una pena ajustada a derecho conforme las infracciones denunciadas.

11°) Que tal forma de fundar las causales deducidas, esgrimiendo hechos, razones y consecuencias legales incompatibles, no resulta aceptable tratándose de un recurso extraordinario y de derecho estricto como lo es el de casación en el fondo, en el cual cabe demandar, para que esta Corte pueda entrar al estudio y decisión del mismo, que se señale y explique con precisión y fundamento los errores de derecho que se advierten en el fallo, así como su influencia sustancial en su parte dispositiva, todo ello en correspondencia con las solicitudes efectuadas en su petitorio, características de las que carece un arbitrio que, como el revisado, presenta fundamentos y peticiones alternativas y excluyentes, defectos que constituyen un óbice insalvable siquiera para su estudio.

12°) Que por lo expuesto, el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de Albornoz Solar tampoco podrá prosperar.

13°) Que los respectivos recursos de casación en el fondo presentados por el apoderado del Programa de Derechos Humanos y por la parte querellante contra la decisión penal del fallo, se afincan de manera similar en la causal N° 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por errónea aplicación del artículo 103 del Código Penal, al considerar el fallo la minorante de media prescripción.



Solicitan anular el fallo y dictar uno de reemplazo que le imponga a Albornoz Solar, el máximo de la pena privativa de libertad contemplada por el legislador, en el caso del primer recurrente, y una pena que guarde relación con la gravedad del delito cometido, el segundo.

14°) Que sobre esta temática, esto es, la rebaja de pena por prescripción gradual del artículo 103 del Código Penal, como reiteradamente lo ha señalado esta Corte, la calificación de crimen contra la humanidad dada al hecho ilícito de autos, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de *ius cogens* provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo.

15°) Que de esa manera, la sentencia en examen ha incurrido en la causal denunciada por ambos recurrentes del N° 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, al imponer una pena menos grave a la legalmente correspondiente, por acoger la minorante del artículo 103 del Código Penal, con error de derecho y con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, ya que en virtud de ella se rebaja la pena en dos grados, yerro que deberá ser enmendado anulando la sentencia en su parte penal y dictando la correspondiente de reemplazo.



16°) Que en el arbitrio de casación en el fondo deducido por la querellante contra la parte civil de la sentencia impugnada se reclama por acoger la excepción de pago opuesta por la defensa fiscal, con infracción de los artículos 76 de la Constitución Política de la República y 1591, 1592, 2314 del Código Civil, aduciendo el fallo una incompatibilidad entre las pensiones de reparación asignadas por la Ley N° 19.123 y las sumas demandadas.

Pide se anule el pronunciamiento impugnado y se dicte uno de reemplazo que acoja la demanda civil en todas sus partes, confirmando lo resuelto en primera instancia.

17°) Que sobre esta materia, uniformemente esta Corte ha desestimado la compensación o pago invocado por el Fisco, en virtud de las políticas públicas implementadas por la Ley N° 19.123 de las que se habrían beneficiado los demandantes, porque esa legislación especial no contiene incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ni se ha demostrado que haya sido diseñada para cubrir toda merma moral inferida a las víctimas de atentados a los derechos humanos, puesto que se trata de modalidades diferentes de compensación, por lo que el que las asuma el Estado voluntariamente no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el régimen jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley.

18°) Que de esta manera, la sentencia igualmente ha aplicado erróneamente las normas cuya infracción denuncia el recurso de casación en el fondo en estudio, lo que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, pues ha tenido como corolario denegar la indemnización pretendida, yerro que



deberá ser corregido anulando también esta parte del fallo impugnado y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, y 767 y siguientes del de Procedimiento Civil, **se declara lo siguiente:**

I. Se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la defensa de Roque Albornoz Salazar contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve.

II. Se acogen los recursos de casación en el fondo deducidos por el Programa de Derechos Humanos y por la parte querellante contra la decisión en lo penal de la sentencia ya referida y, además, el recurso de casación en el fondo interpuesto por esta última parte contra la decisión civil del mismo fallo, el cual es nulo y se lo reemplaza por el que se dicta inmediatamente a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Acordada la decisión civil con el voto en contra de la Abogado Integrante Sra. Coppo, quien no obstante estar de acuerdo con que la sentencia adolece del vicio que se le reprocha, estima que éste no tiene influencia en lo dispositivo del fallo, por cuanto debió acogerse la excepción de prescripción, también opuesta por la defensa fiscal, por las siguientes razones:

1º Que la institución de la prescripción busca consolidar, más que la justicia, la seguridad y estabilidad en las relaciones jurídicas, bases en que se asienta la convivencia civilizada. En esa orientación, existe amplio consenso en orden a reconocerla como un principio general del derecho, de modo tal que



atento el vacío del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que no la delimita en el ámbito civil, como sí lo hace en el penal, no cabe sino concluir que la admite tácita o implícitamente, pues de lo contrario no habría restringido su alcance a sólo este último aspecto. Lo anterior, teniendo especialmente presente que constituyendo la prescriptibilidad de todas las obligaciones civiles la regla general, cualquiera excepción debería ser establecida explícitamente.

2º Que la acción civil de indemnización de perjuicios deducida pertenece al ámbito patrimonial pues su contenido es completamente pecuniario desde que su finalidad no es otra, en términos simples, que hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, encontrándose por tanto regida por el Derecho Civil, pues, como se dijo, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos -que establece la imprescriptibilidad de la acción penal derivada de esa clase de delitos-, no excluye la aplicación del derecho nacional sobre la materia, particularmente las reglas contenidas en los artículos 2497 y 2332 del Código Civil, que regulan la institución de la prescripción en el área de la responsabilidad civil extracontractual, que es la que se debate en este caso.

Asimismo, la prescripción, en concepto de esta disidente, no es ajena al derecho público y la regla general es que las acciones sean prescriptibles, requiriéndose de norma legal expresa que declare lo contrario sin que se divise la razón de excluir tal certidumbre en las relaciones de los particulares con la administración. Por lo demás, el artículo 2497 del Código Civil, consagra que la prescripción corre por igual a favor y en contra de toda clase de personas, contemplando al Estado, expresamente entre quienes se encuentran sujetos a sus reglas.



3º Que dado que la acción de indemnización de perjuicios ejercida es de contenido patrimonial y que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, dicha pretensión se rige por las disposiciones legales contempladas en el Título XXXV del Libro IV del Código Civil, entre éstas el artículo 2332, que indica que las acciones para hacer efectiva la responsabilidad civil por daño o dolo prescribe en el plazo de cuatro años, contados desde la perpetración del acto.

4º Que, sin embargo, atendida las especiales circunstancias en que se perpetraron los delitos de los cuales emana la acción civil deducida en este juicio, la aplicación de las normas sobre prescripción de la responsabilidad civil extracontractual deben admitir que el plazo de cómputo correspondiente es susceptible de contarse desde una época inicial distinta de la que establece el artículo 2332 del Código Civil. Ello, porque tratándose de un caso como el de autos es posible sostener que los titulares de la acción indemnizatoria no estaban en condiciones de haberla ejercido en tanto no tenían certeza jurídica en orden a que la persona que experimentó el daño que es causa de la indemnización que se demanda, tenía la calidad de víctima de un delito de lesa humanidad y, por lo mismo, no parece razonable computar el término legal de prescripción sino desde que dichos titulares tuvieron ese conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer ante los tribunales de justicia el derecho al resarcimiento por el daño sufrido que el ordenamiento les reconoce. Ello, es sabido, ocurrió años después, pero aun así, el plazo de cuatro años que contempla el artículo 2332 del Código Civil, al tiempo de notificarse válidamente la



demanda al demandado Fisco de Chile, se encontraría, en todo caso, cumplido y, consecuentemente, extinguida la vía civil intentada.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm y de la disidencia su autora.

Regístrese.

Rol N° 13.877-19

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y la Abogada Integrante Sra. Carolina Coppo D. No firman los Ministros Sres. Valderrama y Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y en comisión de servicios respectivamente.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 24/12/2021 13:55:50

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 24/12/2021 13:55:51

CAROLINA ANDREA COPPO DIEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 24/12/2021 13:58:22



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 24/12/2021 14:34:51

En Santiago, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 24/12/2021 14:34:51



Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada de fs. 1970 y siguientes, con excepción de sus fundamentos 7°, 12° y 21°, que se eliminan y en su motivo 18° se sustituye el término “cómplice” por “autor”. Asimismo, se mantiene la sentencia complementaria de fs. 2161. Del fallo anulado se reproducen únicamente sus considerandos 1° a 4° y el 5° con excepción de su último párrafo. De la sentencia de casación que precede se reiteran sus basamentos 14° y 17°.

Y teniendo, además, presente:

1°) Que la pena asignada al autor del delito consumado de homicidio calificado establecida en el N° 1 del artículo 391 del Código Penal, vigente a la época de ocurridos los hechos, era de presidio mayor en sus grados medio a presidio perpetuo y, considerando que al acusado Albornoz Solar le beneficia una atenuante y le perjudica una agravante, se compensaran racionalmente, pudiéndose recorrer toda la extensión de la pena.

2°) Que por las razones expresadas en el basamento 3° de la sentencia anulada que se dio por reproducido, se discrepa del informe de la sra. Fiscal Judicial de fs. 2192, que propone revocar el fallo apelado y, en su lugar, absolver al acusado Albornoz Solar.

Y considerando además lo dispuesto por los artículos 510, 526 y 527 del Código de Procedimiento Penal, se declara lo siguiente:



I. En cuanto a la acción penal:

Se confirma la sentencia apelada de 25 de julio de 2017, escrita a fs. 1970 y siguientes, **con declaración** que Roque Isaías Albornoz Solar, queda condenado a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de homicidio calificado en la persona de Augusto Ramón Cepeda Venegas, cometido el día 20 de Septiembre de 1973, y al pago de las costas de la causa.

La pena privativa de libertad impuesta deberá cumplirla efectivamente, por no resultar procedente algunos de los beneficios contemplados en la Ley N° 18.216, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad en esta causa entre el 22 de abril y el 6 de julio de 2015.

II. En cuanto a la acción civil:

Se confirma la sentencia apelada de 25 de julio de 2017, escrita a fs. 1970 y ss.

Acordada en la parte que decide la acción civil con el voto en contra de la Abogada Integrante Sra. Coppo, quien fue de la opinión de revocar la sentencia del grado y rechazar la demanda por las razones vertidas en el fallo de casación que antecede.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm y de la disidencia su autora.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Rol N° 13.877-19



Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y la Abogada Integrante Sra. Carolina Coppo D. No firman los Ministros Sres. Valderrama y Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y en comisión de servicios respectivamente.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 24/12/2021 13:55:51

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 24/12/2021 13:55:52

CAROLINA ANDREA COPPO DIEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 24/12/2021 13:58:22



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 24/12/2021 14:34:52

En Santiago, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 24/12/2021 14:34:52

